



Bogotá, 12 de septiembre de 2022

Señores/señoras
Honorables Representantes Comisión Primera
Cámara de Representantes

Ref. Audiencia pública proyectos de Acto Legislativo
019, 005 y 051 relacionados con el reconocimiento del
derecho a una alimentación adecuada.

Señores/as Representantes,

Reciban un atento saludo del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR). Agradecemos la invitación a la audiencia convocada para el día de hoy y a continuación remitimos los argumentos expresados en la misma.

Buen día a todos y todas. Un saludo especial a los y las congresistas convocantes de esta audiencia y a las organizaciones sociales y campesinas que han impulsado estas iniciativas legislativas.

Mi nombre es Jomary Ortegón Osorio, presidenta del Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”. Hacemos parte de la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo que trabaja por la realización de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y de un grupo de organizaciones y universidades que trabajan por el derecho a la salud.

Las iniciativas que nos convocan a esta audiencia pública **proyectos de Acto Legislativo 051, 019, 005** responden desde diferentes énfasis a la imperiosa necesidad de procurar la garantía del derecho humano a una alimentación adecuada.

En primer lugar, queremos enfatizar que la constitucionalización del derecho a la alimentación, desarrolla la obligación contenida en el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) de adoptar medidas, “en

particular la adopción de medidas legislativas, [para garantizar] la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos”. Una similar obligación se encuentra contenida en los artículos 2 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), que establece la obligación de adoptar medidas para lograr progresivamente la realización de los DESCAs. En consecuencia, como organización de derechos consideramos que la constitucionalización del derecho fundamental a la alimentación constituye un desarrollo de las obligaciones internacionales adquiridas por el Estado colombiano hace más de tres décadas.

A diferencia de lo que se planteó en la audiencia por alguno de los intervinientes, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ya ha reconocido la justiciabilidad del derecho, ya sea por vía directa, por vía de conexidad o en favor de grupos particularmente vulnerables como la población desplazada. En consecuencia, no puede ser un argumento viable, el señalar que debería constitucionalizarse el derecho, porque podría ser objeto de acciones de tutela, cuando ya viene protegiéndose por esa vía.

La constitucionalización del derecho a la alimentación aporta parcialmente a la superación de la dicotomía entre derechos que hizo la Constitución Política de 1991 que nombra a la mayoría de DESCAs como servicios públicos y no como derechos exigibles y justiciables. En esta vía, sugerimos que en las exposiciones de motivos se eliminen las referencias a las generaciones de derechos, al decir que el derecho a la alimentación es de segunda generación, visión superada desde la Conferencia Mundial de Viena de Derechos Humanos de 1993, cuya Declaración y Programa de Acción reconocen la universalidad, indivisibilidad e interdependencia de todos los derechos humanos.

En segundo lugar, nos parece positivo que el proyecto de Acto Legislativo 019 reconozca “el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre”, tal como se deriva de la consagración internacional que hace el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales PIDESC. Esta formulación debería mantenerse en la propuesta final.

En tercer lugar, es importante que dicha integralidad e interdependencia se considere al momento de abordar el derecho humano a la alimentación. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, en su Observación General n.º 12, planteó que el derecho a la alimentación adecuada se ejerce cuando todo hombre, mujer, niño o niña, ya sea individualmente o en colectivo, “tiene acceso físico y económico, en todo momento, a la alimentación adecuada o a medios para obtenerla”.

Por lo anterior, el derecho a la alimentación adecuada no debe interpretarse “en forma estrecha o restrictiva asimilándolo a un conjunto de calorías, proteínas y otros elementos

nutritivos concretos”. En otras palabras, el derecho a la alimentación adecuada no debe concebirse exclusivamente desde enfoques nutricionistas e individualistas, que reduzcan la política pública a obtención de un determinado nivel de nutrientes para cada persona, sino que está ligado a la realización de otros derechos como la vida, la salud, la tierra, la cultura, el medio ambiente sano y el derecho al trabajo en condiciones dignas, para la consecución de una existencia que posibilite el despliegue de las capacidades individuales y colectivas para vivir en comunidad, y el logro de una “vida libre de angustias, satisfactoria y digna”¹.

Abrirnos a una mirada más amplia nos lleva a considerar otras perspectivas que abogan por diseños sectoriales capaces de responder a las desigualdades estructurales en nuestra sociedad que hacen que el hambre afecte de manera desproporcionada a ciertas poblaciones: niños y niñas, comunidades afrocolombianas, pueblos indígenas, mujeres, o campesinado, todos sujetos de especial protección constitucional. En el caso de las mujeres cabeza de hogar, por ejemplo; la lenta tasa de recuperación económica posterior a la pandemia impactó en los mercados laborales, lo cual, de acuerdo con la OIT, ha implicado que menos mujeres se reincorporen al mercado laboral, haciéndolas más vulnerables al hambre y la malnutrición junto a sus grupos familiares². Una política alimentaria para ser efectiva, requiere la flexibilidad suficiente para abordar de manera interseccional e intercultural el problema del hambre. Por esta razón, la consagración constitucional debería incorporar, un enfoque interdependiente, intercultural e interseccional en consonancia con el artículo 13 constitucional, la mención a que se adoptarán políticas en favor de grupos especialmente vulnerables y discriminados.

También en el fondo de las discusiones sobre alimentación se encuentra la situación del derecho a la salud, en una visión que trasciende la simple ausencia de enfermedad individual, que tome en cuenta los determinantes sociales de la salud. Lo anterior incluye los determinantes comerciales, es decir, aquellas estrategias del sector corporativo utilizadas para promover productos perjudiciales como comestibles con exceso de azúcares, grasas o sodio, generando la instauración de dietas corporativas que menoscaban nuestra soberanía alimentaria, debilitan la diversidad productiva del campo y uniformizan la oferta nutricional, al tiempo que aumentan los costos públicos del sistema de salud frente a enfermedades no transmisibles.

Hoy vivimos un cambio de las dinámicas de consumo, cambiamos alimentos reales resultado del trabajo campesino, por el consumo de productos comestibles ultraprocesados, como puede notarse en la imposición a las tiendas de barrio de una

¹ Informe del Relator Especial sobre el derecho a la alimentación, el Sr. Jean Ziegler, presentado de conformidad con la resolución 61/163 de la Asamblea General. 1.

² Global Report on Food Crises (GRFC 2022)

oferta estandarizada que hace cada vez más difícil conseguir una variedad de productos propio de las economías campesinas.

Los determinantes comerciales de la salud también incluyen la interferencia y la captura corporativa. Siguiendo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y al Relator Especial de Naciones Unidas para el Derecho a la Salud, señor Dainius Pūras, entendemos como interferencia todas las acciones orientadas a impedir, dilatar o desnaturalizar medidas de salud pública, ampliando el radio de acción de la industria, pasando de regulada a reguladora en asuntos de salud y derechos humanos. La consagración constitucional del derecho a la alimentación, debería contribuir al reconocimiento de estos puentes entre derechos reconocidos constitucionalmente.

En cuarto lugar y para finalizar, queremos profundizar en la distinción entre soberanía y seguridad alimentaria. De acuerdo con la FAO, la *seguridad alimentaria y nutricional* tiene lugar cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico, social y económico a alimentos en cantidad y de calidad suficientes en términos de variedad, diversidad, contenido de nutrientes e inocuidad para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos, a fin de llevar una vida activa y sana (definición tomada de la exposición de motivos del PAL 051).

En contraste, la *soberanía alimentaria* que se menciona en el proyecto de Acto Legislativo 019, hace referencia al derecho de cada pueblo a definir sus políticas y estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de los alimentos que garanticen una alimentación sana, con base en la pequeña y mediana producción, respetando sus propias culturas y la diversidad de los medios campesinos, pesqueros, étnicos e indígenas de producción agropecuaria, comercialización y gestión de recursos.

La soberanía alimentaria reivindica entonces la autonomía y la capacidad de acción del campesinado, de los y las pequeñas productores en el ámbito de la alimentación, procurando garantizar los derechos de los residentes de las zonas urbanas y rurales a adquirir alimentos nutritivos y culturalmente apropiados. Tiene como énfasis garantizar las condiciones que hacen posible la producción de alimentos, procurando asegurar el vínculo entre producción, distribución y consumo para pueblos, comunidades y naciones. Este asunto es crucial para nuestro país.

Actualmente, en Colombia se importan alrededor de 3.6 millones de toneladas de maíz, trigo y torta de soya; una tasa tan alta de importación nos vuelve un país supremamente vulnerable a posibles situaciones de crisis, situación especialmente preocupante en un contexto de fenómenos climáticos extremos exacerbados por la crisis climática y los conflictos bélicos internacionales. Consideramos que tal vulnerabilidad no se resuelve

adoptando un enfoque basado en la seguridad alimentaria, sino promoviendo un enfoque holístico de lo alimentario que se exprese en una política pública basada en la garantía de los derechos humanos y que honre las obligaciones adquiridas por el Estado colombiano.

Según el reporte mundial de crisis alimentaria, se estima que para 2022 la grave situación de inseguridad alimentaria se exacerbará, en parte, por los efectos de la guerra en Ucrania, dado su impacto sobre los precios de los alimentos, la energía, fertilizantes y provisiones necesarias para el mantenimiento de cultivos. Lo anterior, sumado a los ya conocidos fenómenos climáticos, genera nuevas situaciones que la política pública alimentaria debe tener en cuenta. No es casual que la inflación doméstica sobre los precios de los alimentos haya aumentado de manera significativa entre el tercer trimestre de 2021 y el segundo trimestre de 2022. En un país cuya cifra de desempleo sigue rondando los dos dígitos, el aumento del precio de los alimentos genera graves consecuencias. La suma del desempleo, los bajos ingresos, pobreza y la comida costosa, es una mezcla peligrosa que implica una violación masiva de los derechos humanos de gran parte de la población colombiana.

Por lo anterior, no basta hablar de seguridad alimentaria, pues solo habrá seguridad ante la ausencia de crisis sobrevinientes. En contraste, la soberanía nos prepara para los días difíciles, para las grandes disrupciones en las cadenas logísticas, para los cierres de puertos por conflictos, para pandemias futuras. Además, una política pública basada en la soberanía alimentaria procura proteger sectores sistemáticamente vulnerados como el campesinado, los pueblos indígenas y las comunidades afro, recordándonos que la comida no viene de una estantería en el supermercado, sino del trabajo comunitario que transforma la naturaleza. También amplía el margen de acción normativa y política en favor de todos estos actores que soportan la producción de alimentos.

En conclusión sugerimos:

1. Mantener en el proyecto de Acto Legislativo el reconocimiento explícito del derecho a la alimentación adecuada y el derecho de toda persona a estar protegida contra el hambre. Eliminar la referencia a generaciones de derechos de la exposición de motivos.
2. Proyectar en el reconocimiento constitucional los enfoques de interdependencia interculturalidad e interseccionalidad al momento de consagrar el derecho.
3. Mantener el reconocimiento del logro de la seguridad y soberanía alimentaria como fines de la actuación estatal en materia alimentaria como se propone en el proyecto de Acto Legislativo 019.

4. Reconocer la relación de los derechos del campesinado y otros actores sociales relevantes en la producción de alimentos.
5. Mantener en el texto de proyecto de Acto Legislativo la “prioridad a las formas de producción de alimentos que estén acorde con una dieta saludable y que generen un menor impacto ambiental” y agregar “que protejan la vida campesina”.
6. Armonizar el proyecto de Acto Legislativo con las disposiciones relevantes del Acuerdo de Paz en materia de Reforma Rural Integral y Solución al Problema de las Drogas Ilícitas.

Este momento de transición mundial nos llama a la apuesta decidida por el campo, por la soberanía alimentaria, en buena hora aparecen estas iniciativas normativas pues la discusión a la que nos convocan estos tiempos es el delicado equilibrio entre la producción de alimentos y el establecimiento de reservas, esta intervención parte una lanza en favor de la redistribución de la tierra para la producción de alimentos en lugar de mirar codiciosos la ampliación de la frontera agrícola.

Cordialmente,



Jomary Ortigón Osorio
Presidenta CAJAR